

RESOLUCION No. 1515

**"POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"**

**LA DIRECTORA LEGAL AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
AMBIENTE**

De conformidad con Ley 99 de 1993, el Decreto 1618 de 1978, el Decreto 1594 de 1984, el Decreto 2811 de 1974, el Decreto 1791 de 1996, las disposiciones contenidas en el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, en los Decretos Distritales 561 del 29 de diciembre de 2006 y Decreto 472 del 23 de diciembre de 2003 y la Resolución No 110 del 31 de enero de 2007,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que con radicado No. **2004ER20768** del 16 de Junio de 2004, el señor **CAMILO GARCIA**, en calidad quejoso, residente en la Carrera 28 A No. 153 – 80 Interior 7 Apto 101, Barrio Usaquén, Localidad Usaquén de Bogotá, presentó al Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente – DAMA, hoy Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, Oficina de Quejas y Reclamos, queja por Tala y Poda, sin presunta autorización realizadas en el Parque Compartido por la unidad 2 – 3 del Barrio Icatá II en la Carrera 28 A con Calle 153, Barrio Usaquén, Localidad Usaquén, realizada presuntamente por los jardineros no identificados del Barrio Icatá II.

Que con base en el Concepto Técnico No. 2876 del 14 de Abril de 2005 se determinó la tala de dos (2) individuos arbóreos de la especie **CAUCHO**. Así mismo el señor **CAMILO GARCIA** (quejoso), informó que dicha actividad la realizó los jardineros autorizados por la administración del conjunto.

BOG
SECRETARÍA
DE AMBIENTE

SECRETARÍA DE AMBIENTE

Handwritten signature or mark

Que de acuerdo con el Decreto 472 de 2003 y el Concepto Técnico No. 3675 del 22 de mayo de 2003, por medio del cual se define la tabla de valores por IVP's, el infractor identificado deberá garantizar la persistencia del recurso forestal mediante el pago de 2,100 IVP's equivalentes a 1,10 SMLMV, para un total de compensación de \$417.830.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que de conformidad con las disposiciones Constitucionales en especial, las señaladas en el artículo 8º, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, en concordancia con el artículo 79 Ibídem, que contempla el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y establece para el Estado, entre otros, el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que el artículo 80 Constitucional, le asigna al Estado el imperativo de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, generando desarrollo sostenible, conservación y restauración o sustitución de estos. Atribuye también como responsabilidad estatal la prevención y control de agentes de deterioro ambiental, y que en cuyo caso, se configura la potestad sancionatoria como un mecanismo de protección frente al quebrantamiento de normas ambientales, y que consecuentemente hace exigible el resarcimiento de los daños originados.

Que de acuerdo con las disposiciones Constitucionales, nace para el Estado, la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y la diversidad e integridad del ambiente, por cuanto, la carta política de Colombia, prevé el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, correspondiéndole planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además, debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, y exigir la reparación de los daños causados.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

1515

Que el régimen sancionador, encuentra fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política, que dispone la aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, del debido proceso, en virtud del cual, *"Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio"*, y el desarrollo de la función administrativa conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que adicionalmente, dentro de las garantías constitucionales del debido proceso sancionador, cobran especial importancia los principios de igualdad, celeridad y caducidad de la acción, que imponen a la administración, el deber de actuar diligentemente y preservar las garantías de quienes resultan investigados; es así como, la caducidad tiene por objeto, fijar un límite en el tiempo para el ejercicio de ciertas acciones, en protección de la seguridad jurídica y el interés general.

Que de acuerdo al concepto técnico **No. 2876 del 14 de Abril de 2005**, anteriormente relacionado, se evidenció la **tala sin autorización de (2) árboles de la especie Caucho**, contraviniendo de ésta forma la protección forestal ambiental, conllevando como resultado un deterioro ambiental, lo cual amerita el inicio y posterior desarrollo de trámites de carácter investigativo y sancionatorio respecto de los presuntos infractores, situación que no se llevó a cabo por parte del Departamento Administración de Medio Ambiente - DAMA, hoy Secretaria Distrital de Medio Ambiente - SDA.

Que el Decreto 1594 de 1984, define el proceso sancionatorio en los artículos 197 y siguientes, no obstante dicho régimen no contiene la figura de la caducidad administrativa, razón por la cual y, frente al vacío de la norma, nos remitimos a lo dispuesto en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, el cual establece que: *"Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas."*

Que sobre esta materia, vale la pena recalcar la posición del H. Consejo de Estado, Sección Primera, expediente 4438, MP. Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, frente a la caducidad relacionada con el hecho puntual en el tiempo y el transcurso del

BOG
BOGOTÁ
POSITIVA

GOBIERNO DE LA CIUDAD

3

mismo por más de los tres (3) años a que se refiere el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:

(...) "Aquel fenómeno jurídico que limita en el tiempo el ejercicio de una acción, independientemente de consideraciones que no sean solo el transcurso del tiempo; su verificación es simple, pues el término ni se interrumpe ni se prorroga y es la Ley que al señalar el término y el momento de su instalación, precisa el término final e invariable, debe interpretarse que teniendo en cuenta las normas que dicta el Legislador deben producir los efectos en ellas previstos, y en tal sentido, cuando se hace referencia a la caducidad de la acción prevé el ejercicio de la autoridad administrativa en la medida que también produzca efectos en derecho, es decir, mediante la expedición dentro del término de tres años previsto de manera general en la norma " (...).

Al respecto, el H. Consejo de Estado, reiteró su posición, mediante providencia del 23 de junio de 2000, expediente 9884, Magistrado ponente Dr. Julio E. Correa Restrepo, donde se precisó:

*"(...) Pues bien, el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al presente caso, es claro en disponer que salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que puede ocasionarlas, **por lo tanto el término se debe contar a partir del momento en que se produce el hecho infractor.**" (...)*
Resaltado fuera del texto original.

Que respecto al término establecido en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, se han expuesto tres tesis en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., impartió directrices a las entidades y organismos Distritales, a través de la Directiva No. 007 de noviembre 09 de 2007, en la que señaló lo siguiente:

(...) "Como se observa, han sido diversas las tesis expuestas en relación con el tema objeto de este documento, sin que hasta la fecha se haya generado una única línea jurisprudencial, razón por la cual se hace necesario impartir las siguientes instrucciones en



cuanto al término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración: "(...)
*Teniendo en cuenta que no existe una posición unificada de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa frente a la interrupción del término de caducidad de la facultad
sancionatoria de la administración, y que la administración debe acatar el criterio que
desde el punto de vista del análisis judicial genere el menor riesgo al momento de
contabilizar dicho término, se recomienda a las entidades Distritales que adelanten
actuaciones administrativas tendientes a imponer una sanción, que acojan en dichos
procesos la tesis restrictiva expuesta por el Consejo de Estado, es decir, aquella que indica
que dentro del término de tres años señalado en la norma en comento, la administración
debe expedir el acto principal, notificarlo y agotar la vía gubernativa..." (Subrayado
fuera de texto).

Que así las cosas y, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 del
Código Contencioso Administrativo y, las instrucciones impartidas a través de la
Directiva No. 007 de 2007 expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor
de Bogotá, se deduce que la administración, para el caso en concreto, disponía de
un término de 3 años contados a partir de la fecha en que conoció de la queja de la
tala sin autorización, esto es, desde el **16 de Junio de 2004**, para la expedición
del acto administrativo de sanción, su notificación y debida ejecutoria, trámite que
no se surtió, operando de esta manera el fenómeno de la caducidad.

Que, siendo la caducidad, una institución de orden público, a través de la cual el
legislador establece un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionadora
de la administración, que tiene como finalidad armonizar dicha potestad con los
derechos constitucionales de los administrados, no hay duda, que su declaración
proceda de oficio, por cuanto, al continuar el proceso, este culminaría con un acto
viciado de nulidad, por falta de competencia temporal de la autoridad que lo emite.

En igual sentido, el Doctrinante Luis Alfonso Acevedo Prada, en su obra "*Caducidad,
Prescripción, Perención, Preclusión y Términos*" Primera edición 2004, expreso al
respecto de la caducidad lo siguiente:

*(...) "Ahora bien, en la caducidad ocurre que proceden sus efectos ope legis o de pleno
derecho, sin necesidad de que el interesado en beneficio de sus efectos la alegue o
proponga como defensa exceptiva. El funcionario competente en el juzgamiento*

pertinente, no solo debe sino que esta obligado a declararla sin necesidad de petición de parte" (...)

Que, de otro lado, si bien es cierto los jardineros del Barrio Icatá II aparecen como presuntos contraventores, también es cierto que al no adelantarse el respectivo proceso sancionatorio, fue imposible desvirtuar o confirmar con certeza dicha condición.

Que la jurisprudencia en materia del Debido Proceso Administrativo ha venido desarrollando de manera minuciosa las directrices que enmarcan su contenido y aplicación en los siguientes términos:

"...El artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso debe observarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir que obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la administración pública."

El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de las autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y, por contera, contrarios a los principios del Estado de derecho. Ello en virtud de que *"toda autoridad tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas, realizadas por fuera de los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes..."*

"De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio" (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-1341 del 11 de diciembre de 2001 (M.P. Alvaro Tafur Galvis).).

"El derecho de defensa en materia administrativa se traduce en la facultad que tiene el administrado para conocer la actuación o proceso administrativo que se le adelante e impugnar o contradecir las pruebas y las providencias que le sean adversas a sus intereses. La administración debe garantizar al ciudadano interesado tal derecho y cualquier actuación que desconozca dicha garantía es contraria a la Constitución."

2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

N. 1515

En efecto, si el administrado no está de acuerdo con una decisión de la administración que le afecte sus intereses tiene derecho a ejercer los recursos correspondientes con el fin de obtener que se revoque o modifique. (Corte constitucional, Sentencia 1021 de 2002)".

Que en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, es importante precisar que no es viable exigir el pago de la compensación a que hace referencia el Concepto Técnico No. **2876** del **14 de Abril de 2005** obrante dentro del expediente, al no haberse podido establecer con certeza el nombre del infractor (es), ni la responsabilidad del mismo (s).

Que corolario de lo anterior y como quiera que no proceden dentro de las presentes diligencias actuaciones administrativas adicionales a las aquí desarrolladas, se procederá a disponer el archivo definitivo del proceso.

Que el Código Contencioso Administrativo en el artículo 267 establece lo referente a los asuntos no consagrados en la normatividad específica, para lo cual remite al Código de Procedimiento Civil que al tenor literal expresa:

"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo."

Que es necesario entonces remitirnos al Código Civil el cual prevé: **"ARTÍCULO 126. ARCHIVO DE EXPEDIENTES. Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."**

Que el artículo sexto del Decreto 561 del 29 de diciembre de 2006, literal l) asigna al Despacho de la Secretaría la función de conocer en única, primera y segunda instancia, los asuntos que sean de su competencia.

Que a través del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, mediante el cual se modificó la Estructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente - DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, a la que se le asignó entre otras funciones, la de ejecutar el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales, e implementar las acciones de policía que sean pertinentes para el efecto.

BOG
BOGOTÁ
POSITIVA

COMISION DE LA CIUDAD

7

L. 1515

Que de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 1º de la Resolución No. 0110 del 31 de enero de 2007, proferida por la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, mediante la cual se efectúan unas delegaciones a la Dirección Legal Ambiental, le corresponde suscribir los actos administrativos necesarios dentro de los procesos que se adelanten como consecuencia de la violación de las normas sobre protección ambiental o sobre el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, y en consecuencia, ésta Dirección Legal Ambiental es la competente en el caso objeto de estudio.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria respecto de las actuaciones ambientales iniciadas en el expediente **DM-08-05-1116** por el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente DAMA, hoy Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar las presentes diligencias, como consecuencia de lo previsto en el artículo primero de la presente providencia.

ARTICULO TERCERO: Enviar la presente providencia a la Oficina de Expedientes de la Entidad para el respectivo archivo de las diligencias.

ARTICULO CUARTO: Notificar la presente providencia al señor **CAMILO GARCÍA** en la Carrera 28 A No. 153-80, localidad de Usaquén, de ésta ciudad.

ARTICULO QUINTO: Fijar la presente providencia en lugar público de esta entidad, Secretaría Distrital de Ambiente -SDA.

N



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

1515

ARTICULO SEXTO: Enviar copia de la presente Resolución a la oficina de Control de Flora y Fauna de la Dirección de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental de esta Secretaría para lo de su competencia.

ARTICULO SÉPTIMO: Publicar la presente Resolución en el boletín ambiental. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO OCTAVO: Enviar copia de la presente Resolución a la oficina de Asuntos Disciplinarios de esta Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, para lo de su competencia.

ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno conforme lo establecido en el Artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., a los 17 MAR 2009

ALEXANDRA LOZANO VERGARA

Directora Legal Ambiental

Proyectó.- MARTHA LILIANA MARTINEZ AMAYA -Abogada.

Revisó.- Dr. Oscar Tolosa

Expediente DM-08-05 - 1116.

BOG
BOGOTÁ
POSITIVA

GOBIERNO DE LA CIUDAD

N